



## Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:  
**Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5)**

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/>

### Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

### Bajo las condiciones siguientes:



**Atribución** — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



**No Comercial** — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



**Compartir bajo la Misma Licencia** — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

**El Retiro Discrecional del Servicio de la Policía Nacional de Colombia Como  
Vulnerador de Derechos Humanos, en caso de personal en tratamiento médico o con  
incapacidad médica (Período de Estudio: 2010-2018)**

**Discretionary Retirement From the Colombian National Police Service as a Human  
Rights Violator, Applied to those with Disability or Medical Treatment.**

Marlene Espinosa Cardozo<sup>1</sup>

Universidad Católica De Colombia

[marescar0129@hotmail.com](mailto:marescar0129@hotmail.com)<sup>2</sup>

## **Resumen**

El objetivo de la presente investigación es verificar la vulneración o no de Derechos Humanos con la aplicación de la facultad discrecional por parte del Director de la Policía Nacional al llamar a calificar servicios (período 2010-2018) en casos de personal en tratamiento médico o con incapacidad médica. Se utiliza el método de dogmática jurídica y se elabora un análisis exegético legislativo tanto de la normativa nacional como internacional. También se elabora un breve estudio

---

1

Candidato a Magister en Derechos Humanos de D.I.H., Especialista en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica de Colombia, Conciliadora en Derecho Ministerio de Justicia y del Derecho en la Cámara de Comercio de Ibagué, abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, Ex Magistrada y actual Auxiliar Judicial del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima. Correo electrónico marescar0129@hotmail.com.

<sup>2</sup>Cómo citar este artículo: Espinosa, C. (febrero - julio de 2019). Cuándo el uso de la discrecionalidad en la Policía Nacional es violatorio de Derechos Humanos. Universidad Católica de Colombia.

El presente artículo es producto de investigación de trabajo de grado para la Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Colombia, Bogotá D.E, 2019.

de la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional de Colombia, en el período 2010-2018. Se analizan el Debido Proceso, la discrecionalidad administrativa, la función de la Policía Nacional y el régimen legal de la incapacidad desde la perspectiva protectora de los derechos humanos. Se concluye que la Dirección General de la Policía a través de su práctica administrativa, ha violado derechos humanos de los policías al ejercer la función discrecional de retiro del servicio activo, en casos de tratamiento e incapacidad médica, sin tomar en cuenta el debido proceso ni las condiciones médicas de ellos. Se advierte la necesidad de respetar las directrices de la Corte Constitucional sobre la motivación del acto discrecional, salvaguardar el derecho al debido proceso y los derechos humanos de los funcionarios policiales.

**Palabras clave:** Discrecionalidad, Policía Nacional, Derechos Humanos, Debido Proceso, Tratamiento Médico.

### **Abstract**

The objective of this investigation is to verify the violation or not of Human Rights with the application of the discretionary power by the Director of the National Police when calling to qualify services (period 2010-2018) in cases of personnel undergoing medical treatment or with medical disability. The method of legal dogmatics is used and an exegetical legislative analysis of both national and international regulations is prepared. A brief study of the jurisprudence of the Council of State and the Constitutional Court of Colombia is also prepared. Due Process, administrative discretion, the role of the National Police and the legal regime of incapacity are analyzed from the perspective of the protection of human rights. It is concluded that The General Directorate of Police, through its administrative practice, has violated the human rights of police

officers by exercising the discretionary function of withdrawal from service, in cases of treatment and medical incapacity, without taking into account the legally established procedure or medical conditions. from them. There is a need to respect the guidelines of the Constitutional Court on the motivation of the discretionary act, safeguard due process and the human rights of the police. Key words: Discretion, Faculty, National Police, Human Rights, Due Process, Medical Treatment, Disability

**Keywords:** Discretionality, National Police, Human Rights, Due Process, Medical Treatment.

## Índice

Resumen.....	2
Abstract .....	3
1. Introducción .....	6
2. Concepto y Evolución Histórica de la Discrecionalidad .....	7
3. Naturaleza Jurídica de la Policía Nacional de Colombia.....	13
4. El Estado Social de Derecho y la Función del Servicio de Policía Nacional .....	15
5. Facultad Discrecional de la Policía Nacional de Colombia.....	19
5.1. La Facultad de Retiro Discrecional de la Policía Nacional. ....	21
6. Necesidades de Transformación del Servicio de Policía .....	26
7. El Debido Proceso Como Derecho Humano .....	34
7.1. El Debido Proceso y los Derechos Humanos de los Miembros de la Policía. ....	37

8. Régimen Legal de las Incapacidades y Tratamientos Médicos para la Policía Nacional .....	39
9. Análisis de Estudio de Caso.....	42
9.1. Intendente Jefe Eduardo José Mancera Barreto.....	42
9.2. Subintendente Ingrid Minnelly Salamanca Arguello.....	44
9.3. Subcomisario Danilo Gómez Meneses. ....	44
10. Reflexiones Sobre Pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.....	46
11. Metodología .....	48
Conclusiones y Recomendaciones .....	49
Referencias.....	53
Referencias Normativas .....	58
Referencias Jurisprudenciales .....	59
Referencias de Prensa .....	62

## **1. Introducción**

En esta investigación se entiende la dogmática jurídica como el método para describir y evaluar el derecho positivo vigente. Para (Bernasconi, 2007) la dogmática jurídica permite la verificabilidad o refutabilidad de las proposiciones que se plantean en la interpretación sobre el contenido del derecho. Esta característica de la dogmática jurídica, le otorga la cientificidad requerida a cualquier trabajo investigativo que pretenda describir la desconexión entre un mandato legal y un derecho humano en un caso concreto.

Con el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos, el presente estudio analizará cuándo la aplicación de la facultad discrecional para retirar del servicio activo a los miembros de la Policía Nacional, conferida a su Director General a través de los actos administrativos, constituye una vulneración de los derechos humanos que tienen dichos funcionarios con respecto a las potestades nominativas del Estado Social de Derecho.

En este trabajo se considera que la variada interpretación y diversa aplicación de la facultad de retiro discrecional, ha generado una clara inseguridad jurídica y laboral que termina por desconocer los derechos y garantías que como servidor público tiene el policía en representación del Estado Colombiano. Tal condición lleva expreso el reconocimiento de la dignidad humana, por lo que ha de entenderse que los actos administrativos por medio de los cuales se materializa la facultad discrecional del Estado afectan a sus asociados. Por lo tanto, estas decisiones deben adoptarse con base en los preceptos constitucionales, legales, reglamentarios y del derecho internacional de los derechos humanos. Esto, por cuanto forman parte del núcleo esencial de derechos en Colombia y por lo cual no puede perderse de vista que la discrecionalidad del Director General de la Policía Nacional ha de ser una facultad regulada. Aun cuando dicha

facultad represente un grado de libertad para su aplicación, ésta no puede ser ilimitada o arbitraria, en tanto que debe observar un mínimo de requisitos que como garantía fundamental deben ser de obligatorio cumplimiento, así como los fines del servicio público de la policía.

Así las cosas, la aplicación de la facultad discrecional de retiro para los miembros de la Policía Nacional no puede ser la excepción, por lo que ha de ejecutarse prudentemente bajo los mismos preceptos y con las mismas limitaciones que la Constitución, las Leyes y los Reglamentos le imponen. De no ser así, indudablemente estaríamos frente a una facultad interpretativa incongruente e indeterminada, pues quedaría al libre criterio e interpretación del Director de turno, condicionado a sus propios beneficios, intereses o pruritos personales, que desdibujarían la praxis administrativa bajo los presupuestos constitucionales del Estado colombiano.

## **2. Concepto y Evolución Histórica de la Discrecionalidad**

La dogmática jurídica ha elaborado numerosas clasificaciones para los actos administrativos en virtud de diversos aspectos particulares de los posibles actos de la administración y en base al criterio propio de cada autor. Una de las más comunes es la que distingue entre actos discrecionales y actos reglados.

En criterio del autor De Los Santos (2012) un acto administrativo puede considerarse discrecional conforme la relación entre la *voluntad creadora del acto con la ley*. Pues es la Ley la que da a la autoridad administrativa “un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, o en qué momento debe obrar, o cómo debe obrar, o en fin, qué contenido va a dar a su actuación”. (p. 119). En contraste, el acto reglado u obligatorio “constituye la mera ejecución de la ley, el cumplimiento de una obligación que la norma impone a la administración cuando se han realizado determinadas condiciones de hecho” (De Los Santos, 2012, p. 119). En otras

palabras, se puede decir que un acto administrativo no es de obligatoria aplicación para un funcionario público por el carácter facultativo que le otorga la ley. En contraposición, con los actos reglados la administración debe actuar con estricto apego a los lineamientos y preceptos dispuestos en la codificación jurídica, bien sea a través de un código, una ley, un reglamento o en fin, cualquier forma mediante la cual se pueda regular el acto (Fernández Ruiz, 2016).

Por otra parte, en la doctrina se ha señalado que no existen actos completamente discrecionales en sí, sino que consisten en ciertas facultades discrecionales de la Administración donde dada la ausencia de regulación taxativa, la mayoría de los actos eran de carácter discrecional, también denominados actos de pura administración (Laubadere, 1967). Con base en ésta conceptualización, puede hablarse de facultad o poder discrecional.

La facultad discrecional tuvo su origen en Francia en el período pos revolucionario nacido de los cuestionamientos a los actos sin control del Gobierno Monárquico. Con la Ley 7-14 de octubre de 1790, “en Francia el poder ejecutivo establece dentro de su propio ámbito la jurisdicción contencioso-administrativa, para el control jurisdiccional de sus propios actos” (González y De la Cruz, 2016, p. 47).

Inicialmente en Colombia, se entendía que los actos administrativos debían ceñirse al cumplimiento de las exigencias legales y formales relacionadas con la competencia. Posteriormente, se dispuso el control respecto al cumplimiento de los fines del acto administrativo en cuanto hacía referencia a la desviación o abuso de poder, cuyo control fue asignado al Consejo de Estado, conforme las atribuciones establecidas por la Constitución de 1991 en el artículo 237: “Son atribuciones del Consejo de Estado, 1. Desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.” (Asamblea Nacional



Constituyente, 1991), en consecuencia, en ejercicio de las facultades otorgadas a esta Alta Corte de lo Contencioso Administrativo podía debatir la legalidad del acto, protegiendo de esa manera los derechos individuales a la dignidad humana, al trabajo, al debido proceso, la igualdad y a elegir profesión u oficio, de todos los integrantes asociados. Estos actos se consideraban discrecionales y no estaban sujetos a revisión por parte de la jurisdicción administrativa (Cassagne, 2007).

El autor Miguel Malagón Pinzón en su obra “Vivir en Policía” reseña de la siguiente manera:

La discrecionalidad tuvo origen en el principio de vinculación negativa de la Administración a la ley, como ya se anotó. (...). Asimismo, el ámbito de la discrecionalidad se va a ir reduciendo con el nacimiento del recurso por exceso de poder (...) No obstante, este control sobre los actos discrecionales no será total, pues la exclusión del control judicial subsistirá en los denominados actos de gobierno (...) (Malagón, 2007, p. 38-42).

Por otro lado, en la doctrina se reconocen dos formas de discrecionalidad en el campo administrativo. En primer lugar está la discrecionalidad “débil”, cuando la información suministrada al agente decisor no es clara, y en segundo lugar, se habla de discrecionalidad “fuerte” cuando el agente no debe apegarse a ningún estándar concreto para tomar la decisión (Agudelo et al., 2017).

Es importante señalar la diferencia entre la discrecionalidad y la arbitrariedad, esta última puede definirse como un “acto o proceder antijurídico de un órgano del poder público que actúa por puro capricho y amenazando con la fuerza del derecho, o empleándola de hecho.” (Otero, 1995, p. 400) En otras palabras, puede expresarse que la diferencia del acto discrecional con el acto arbitrario es la motivación del mismo. Los primeros exigen una motivación, un fundamento

que soporte la medida adoptada por la autoridad. Y dicho fundamento debe ser suficiente (Beltrán de Felipe, 1995).

Como señala el autor Ramón Fernández:

La necesidad de que las decisiones administrativas puedan reportar una explicación objetiva (...) una forma imprescindible de búsqueda del consenso democrático en la sociedad actual. Se trata de un esfuerzo puramente de justificación de las decisiones que muestra su carácter por ello la imprescindible legitimidad de ejercicio de sus autores, que la comunidad, que no acepta ya la mera imposición de las mismas por vía coactiva, inexcusablemente reclama. (Fernández, 1994, p. 105)

No se trata de consignar una motivación cualquiera sino que se exige que ésta sea congruente, es decir, que esté acorde con los hechos que generaron el acto administrativo, pues no se trata que la autoridad que emplea el acto discrecional elija una de las opciones posibles, sino que la que se adopte sea realmente la más adecuada para obtener o cumplir los fines perseguidos. Que explique además la razón por la cual se ha elegido, es necesario que dicha opción sea la más adecuada al fin que se pretenda, la más racional y la que más se adapte a los principios jurídicos (Aleman- Pardo, 1997, p 116).

En la actualidad y tras décadas de desarrollo y evolución del derecho por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción constitucional, los órganos de cierre de esas jurisdicciones han sentenciado negativamente para el Estado colombiano el uso de la indebida aplicación de la facultad discrecional. La Tabla 1 muestra un registro histórico de algunas sentencias que ordenaron la nulidad del acto administrativo por indebida aplicación de la facultad discrecional y el pago de la consecuente indemnización.

**Tabla 1**

*Sentencias por indebida aplicación de la facultad discrecional.*

Corte Constitucional	Consejo de Estado
T-800-1998	SP S-638 de 1996
T-884- 2002	SA 1659-01
T-752- 2003	SB 3446-01 (octubre 2002)
T-660- 2005	SB 893-02 (febrero 2003)
T-752-2005	SB 1244-02 (agosto 2003)
T-1248-2005	SB 3068-01(junio 2006)
T-1258-2005	SP 2000-02046-02(IJ) (enero 2008)
T-1117-2005	SA 5091-05 (junio 2008)
T-156-2006	SB 1936-07(septiembre 2009)
T-170-2006	SA 2176-08(agosto 2009)
T-634-2006	S2 2595-07 (marzo 2011)
T-308-2008	SB 0270-09 (junio 2011)
T-356-2008	SB 0432-07
T-048- 200	SB 0270-09 (junio 2011)
T-104-2009	SA 1971-10
T-108-2009	SA 0002-10 (mayo 2012)
T-251- 2009	SA 0556-10 Δ SB 2698-11
SU-917-2010	SA 0487-09
T-656-2011	SA 088-12(julio 2013)
SU-691-2011	SB 1613-12
SU-556-2014	SA 0438-12 (marzo 2016)
SU-054-2015	SB 0917-12 (topes)
SU-354-2017	S12D 2000- 06686-01(S) (diciembre 2016) Δ SB 2698-11
	SB 0917-2012 (septiembre 2015)
	SB 3065-13 (marzo 2017)
	SB AC 2016- 00661-00 (mayo 2016)

---

SB AC2015- 01161-01 (septiembre  
2015)

SB AC2013- 00779-00 (abril 2016)

SB AC2016- 03509-01(mayo 2017)

S5 AC2017- 00470-00 (marzo 2017)

S5 AC2017-02110-00 (octubre 2017)

S5 AC2017- 02416-01 (diciembre  
2017)

---

Nota: las siguientes abreviaturas permitirán plena identificación de las sentencias enunciadas. SA: Subsección A de la Sección Segunda, SB: Subsección B de la Sección Segunda, S2: Sección Segunda en pleno, SP: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, S12D: Sala Doce Especial de Decisión, S1: Sección Primera, S5: Sección Quinta. (Monroy, 2018, pp. 58-60)

No obstante el trasegar evolutivo en materia de discrecionalidad, la aplicación de esta facultad, se ha mostrado como ilimitada de parte del (Consejo de Estado, 2010) verbigracia, en Sentencia 0938 -10 se afirmó que “de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, el retiro del servicio por facultad discrecional no requiere ser expresamente motivado ni tampoco el acta que recomienda dicha decisión” (p.17).

En Sentencia 0147-15 el (Consejo de Estado, 2015) ratifica su postura indicando que el acto administrativo de retiro discrecional para oficiales y suboficiales de la Policía Nacional “no debe motivarse expresamente... ya que se presume expedido con la finalidad de relevar la línea jerárquica en aras del buen servicio.” (p. 6) Así mismo, el (Consejo de Estado, 2016) en Sentencia 1079 dijo:

Tratándose del retiro del servicio por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional se ha dicho que tal figura entraña el ejercicio de una facultad discrecional, como potestad jurídica del Estado que permite a la autoridad administrativa, adoptar una u otra decisión; es decir, la permanencia o retiro del servicio cuando a su juicio, las necesidades del servicio así lo exijan. En estos eventos, el servidor público que la ejerce es libre para apreciar, valorar, juzgar y escoger la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades. (p. 8)

### **3. Naturaleza Jurídica de la Policía Nacional de Colombia**

La Policía Nacional de Colombia cuenta con más de un siglo de existencia, fue creada en 1891 tras la disolución de las policías departamentales, la policía municipal, el cuerpo de serenos y el escuadrón de guardias montados, acatando al Ministerio de Gobierno pero bajo órdenes del Gobernador de Cundinamarca y el Alcalde de Bogotá. El Decreto 1814 de 1953, en su artículo 3, dispuso que a partir de esa fecha la Institución se incorporaría al “Ministerio de Guerra, como el cuarto componente del Comando General de las Fuerzas Armadas” (Presidencia de la República, 1953) adquiriendo carácter de militar, que perdería con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 (Guerrero, 2011).

Sobre la naturaleza misma de la Policía Nacional de Colombia enunciada en los artículos 1 y 5 de la Ley 62 de 1993, definida como un cuerpo civil armado de seguridad pública que hace parte de la Fuerza Pública de Colombia y conforme a la relación con las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) según el artículo 30 Eiusdem, componen la Fuerza Pública de Colombia. Acorde a lo prescrito en los artículos 9 de la Ley de 1993 y en el artículo 5 del Decreto 1428 de 2007, el Jefe Superior de la Fuerza Pública es el Presidente de la República (Presidencia

de la República, 1993, 2007) quien ejerce su autoridad a través del Ministro de Defensa y éste a su vez, a través del Director General de la Policía Nacional como ente adscrito a dicho Ministerio. En el año 2018, el cuerpo de policía lo conformaban alrededor de 180.000 policías (Policía Nacional de Colombia, 2018) y en la actualidad las facultades legales conferidas a las autoridades de la Policía Nacional se ejercen sobre 170.000 uniformados aproximadamente. (Policía Nacional de Colombia, 2020)

Por otro lado, la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 218 la definió:

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991)

Por mandato constitucional la finalidad de la institución policial además de garantizar las condiciones para pleno desarrollo de derechos y libertades, asegura la convivencia pacífica, el reconocimiento, el respeto y la garantía de los Derechos Humanos, como actividad directa que se consigue mediante un trabajo continuo a nivel organizacional (Congreso de la República de Colombia, 1993).

Teniendo en cuenta que la Policía Nacional es una institución jerarquizada, se origina del deber del Estado y de los mandatos institucionales de protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución de 1991 y de los tratados internacionales. Dentro del marco normativo internacional que debe ser garantizado dentro de las funciones policiales, se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia el 29 de octubre

de 1969 con la Ley N° 74 de 1968 y que entró a regir en el ordenamiento jurídico el 23 de marzo de 1976, del cual se resaltan el artículo 3 que obliga a los Estados Partes a garantizar la igualdad en el goce de los derechos contenidos en la Convención, también los artículos 14 y 15 que contienen el derecho a gozar de garantías en el desarrollo de los procesos judiciales o el derecho al debido proceso (Botero y Guzmán, 2017).

El 20 de septiembre de 1996 mediante la Ley 319 Colombia se adhirió al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Convención de la cual se resalta el artículo 6: derecho al trabajo, y el artículo 7: el derecho a gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, especialmente frente a la remuneración, seguridad e higiene (Botero y Guzmán, 2017).

Con fundamento en las normas anteriores se plantea en este trabajo que al preverse expresamente el debido proceso y la estabilidad laboral, se preserva de la indefensión del personal de policía ante las decisiones arbitrarias de sus superiores y se evitaría el inicio de demandas administrativas que hacen más gravosa no sólo su situación, sino las afecciones a su desarrollo socio familiar, al proyecto de vida, a la autoestima e indudablemente a la estabilidad laboral; derechos que son desconocidos al momento de proferirse los actos administrativos que con base en la facultad discrecional llama a calificar servicios a los integrantes que se encuentran con incapacidad permanente, transitoria, relativa, total, parcial o en tratamiento médico.

#### **4. El Estado Social de Derecho y la Función del Servicio de Policía Nacional**

Para entender la filosofía y los fines esenciales de un Estado Social de Derecho colombiano es preciso acudir a la Constitución Política de 1991 y a los tratados internacionales anteriormente enunciados. A partir de allí pueden entenderse y exigirse del Estado su garantía, protección y

reconocimiento como derechos fundamentales basados en la dignidad humana, susceptibles de protección por consagración expresa en el Artículo 85 de la Constitución Política de 1991, cuya vulneración conlleva a la violación de un Derecho fundamental que son de aplicación inmediata.

Para el cumplimiento de los fines del Estado tales como la garantía de una convivencia pacífica y el mantenimiento de un orden justo, se debe atender la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades que se reconocen en las convenciones de derechos humanos ratificadas por Colombia, sobre todo, el derecho al debido proceso, el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo y el derecho a gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, pues el cumplimiento de las obligaciones y la garantía de tales derechos conlleva a un efectivo, permanente y duradero cumplimiento de los fines del Estado.

El autor Benítez Rojas (2010) considera que en el Estado Social de Derecho existente en Colombia, no puede desconocerse el predominio de la Carta Constitucional como norma de normas, así como su contenido en el que reconoce la existencia de derechos fundamentales, cuyo desarrollo, reconocimiento y garantía debe efectivizarse teniendo como soporte lo dispuesto en la Constitución Política de 1991. Así, cualquier desconocimiento corresponde simplemente a la transgresión de los fines del Estado y al desconocimiento de la norma Superior.

Es precisamente la Supremacía de la Constitución Política de 1991 la que exige que todas las normas existentes o que se vayan a crear estén sujetas a esos fines del Estado Social de Derecho y desde luego, en ellas se encuentran inmersas las normas que disponen la facultad discrecional que por delegación se le ha otorgado a la Policía Nacional.

Al respecto la (Corte Constitucional, 2019) en Sentencia SU237 de 2019 precisó que a facultad discrecional absoluta es incompatible con el Estado Social de Derecho, por cuanto su



aplicación estaría promoviendo una actuación contraria a la Constitución. En la Sentencia SU-091 la (Corte Constitucional, 2016) había referenciado que el Consejo de Estado también reconoció que en un Estado Social de Derecho no podía existir la discrecionalidad absoluta, porque haría imposible que se pueda endilgar una responsabilidad del Estado.

Teniendo en cuenta que las normas que pertenecen al campo del derecho administrativo y sobre las que se debe realizar un análisis respecto de su aplicación conforme los mandatos prescritos en la Constitución de 1991, especialmente en lo que atañe a los derechos fundamentales, es pertinente resaltar que en la misma sentencia SU-091 de 2016 la (Corte Constitucional, 2016) indica que el Gobierno o la Dirección General de la Policía Nacional no puede emitir actos administrativos de retiro discrecional arbitrarios.

En este sentido, el organismo de cierre de la jurisdicción constitucional expuso que la postura adoptada por la jurisdicción contencioso-administrativa respecto a los actos de retiro discrecionales del Ejecutivo encontraba su sustento en la Ley y por lo tanto no estaban motivados. En contraste a dicha posición, la jurisdicción constitucional en Sentencia T-265 de 2013 indica que el retiro discrecional debe atender a razones objetivas y precisas. Por lo que compele al juez administrativo a realizar un control material del acto administrativo de retiro discrecional. (Corte Constitucional, 2013)

Pese a que la Policía Nacional está instituida para la protección de los derechos humanos, como se indicó en Sentencia T-265 de 2013, no puede desconocerse que se vulneran con mucha frecuencia y con gran facilidad los derechos y garantías a sus integrantes con la indebida praxis de la facultad discrecional (Monroy, 2018; Corte Constitucional, 2013). Este planteamiento encuentra cabida en la consecuencia directa que trae consigo la nulidad del acto administrativo de

retiro discrecional a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto es, porque como consecuencia de la violación del derecho al debido proceso el Consejo de Estado, declarada la nulidad del acto administrativo, ordena el reintegro del policía a la Institución y el pago de una indemnización cuando se ha presentado la desvinculación del cargo por medio de un acto de retiro arbitrario. Por su parte, la Corte Constitucional al advertir una violación del derecho a la igualdad y al debido proceso, que derivan de la falta de motivación del acto administrativo, ordena tutelar los derechos violados y por ende los mismos efectos que contempla el Consejo de Estado (Monroy, 2018).

En la investigación de Ortiz, Rodríguez y Perdomo (2011), concluyen que es necesario motivar el acto administrativo a través del cual se aplica la facultad discrecional. Esto, bien sea de manera directa al momento de proferir la decisión o a través de los órganos jurisdiccionales cuando el policial afectado con el acto que pone fin a su servicio activo, acude ante la administración de justicia través de la jurisdicción contencioso-administrativa, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sin embargo, pese a que la Jurisprudencia constitucional en Sentencia SU-237 de 2019 y la doctrina invocan la motivación del acto administrativo mediante el cual se ejerce la facultad discrecional, el ejercicio arbitrario de la misma conlleva a la vulneración de los derechos fundamentales del miembro de la Policía Nacional, que se encuentra incapacitado o en tratamiento médico por cuanto se invierte hoy la carga de la prueba, pues dejan en cabeza del demandante (funcionario policial) la obligación de probar, no que el acto administrativo es ilegal o ilegítimo, sino que en el caso de investigación, esto es, frente a los miembros de la institución que se

encuentran en tratamiento médico o con incapacidades, esa discrecionalidad es vulneradora de los derechos humanos y de sus derechos fundamentales. (Corte Constitucional, 2019)

## **5. Facultad Discrecional de la Policía Nacional de Colombia**

La razón de ser de la facultad discrecional en la Policía Nacional de Colombia es el mejoramiento de la prestación del servicio público de policía como medio esencial para el cumplimiento de los objetivos y fines del Estado. Este fin se encuentra consagrado en el artículo 218 de la Constitución Política de 1991. Por tanto, es fácil deducir que su aplicación no está ligada a la existencia de comportamientos que desdibujen o pongan en peligro esos fines y que afecten de manera efectiva la prestación del servicio de policía.

El Director General de la Policía en aplicación de las normas existentes hará uso de la facultad discrecional cuando: “La ley expresamente la autorice. La ley establezca conceptos o cláusulas que deban ser precisados o reglamentados por la administración. No exista regulación para una circunstancia específica sobreviniente” (Sarria, 1986, p. 185).

La inexistencia de límites legales explícitos no implica una discrecionalidad absoluta para el Director General de la Policía Nacional de Colombia. Existe además lo que (Gordillo, 2013) denomina la “regulación residual” que establece que ninguna autoridad administrativa puede con sus actos afectar la esencia de los derechos, principios y garantías constitucionales, desvirtuarlos o alterarlos. Adicionalmente, (Brewer- Carías, 1966) reconoce que los principios generales del derecho también representan un límite implícito a la facultad discrecional, pues toda autoridad administrativa debe seguir dichos principios en el ejercicio de sus funciones. Principios que rigen el Estado Social de Derecho como el de racionalidad, de justicia, de igualdad, proporcionalidad y el principio de buena fe.

Han sido numerosos los pronunciamientos del Consejo de Estado frente al tema de la facultad discrecional en la Policía Nacional que han facilitado el desconocimiento y la transgresión de los derechos de los miembros de la Policía Nacional. En el presente trabajo se considera que tal afirmación radica en el hecho que esas decisiones están fundamentadas únicamente en la validez, la legalidad o la legitimidad del acto administrativo a través del cual se llama a calificar los servicios de los uniformados. De esta forma se desconocen las garantías constitucionales que como normas supremas regulan la aplicación las normas de menor jerarquía.

Los variados pronunciamientos judiciales de la Corte Constitucional como la Sentencia C-175 de 1993, C-318 de 1995, T-265 de 2013, SU-172 de 2015, T-437 de 2016 y SU-091 de 2016 han sido fundamentales en nuestra investigación, por cuanto han aportado abundante y valiosa jurisprudencia, en el sentido de esclarecer la necesidad de la motivación de los actos administrativos, el cumplimiento de los fines de la discrecionalidad encaminados a la protección de los fines del estado, el sentido de la legalidad para quienes cumplen 15 años de servicio o más en la policía. Por ello, las reiteradas decisiones adoptadas en casos de retiro discrecional son en sí mismas una señal alarmante que refleja el abuso de poder en la praxis institucional. Al respecto el autor (Ángel, 2015) dice:

El hecho que la aplicación de este mecanismo de depuración llegue a instancias de la Corte Constitucional bajo un sin número de acciones legales llevadas hasta segunda instancia, deja en claro que por momentos se ha recurrido a acciones no justificadas o que por el contrario se ha usado como herramienta para responder a necesidades personales de los comandantes y no las metas que como institución se plantearon al momento de su creación (p. 53).

Se destaca que hasta la fecha no hay pronunciamientos expresos en cuanto a la legalidad del retiro de funcionarios en el servicio activo que estén incapacitados o en tratamiento médico.

El Estado colombiano se funda en principios como el respeto, reconocimiento de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad, los derechos laborales y la primacía de los derechos humanos, que por ser de rango constitucional consagrado en el artículo 1º de la Carta Magna no pueden ser desconocidos por los funcionarios policiales, so pretexto de cumplir con las funciones propias de la Administración. Por el contrario, todas las actuaciones del Director General de la Policía deben ejecutarse con el recto acatamiento de aquellos. Tampoco puede desconocerse la racionalidad de los fines bajo la excusa del interés general, pues sería otra forma de desconocer los objetivos que le imponen al desarrollo de la función pública la Constitución Política de 1991, la ley y los Reglamentos.

### **5.1. La Facultad de Retiro Discrecional de la Policía Nacional.**

En la Policía Nacional, el retiro discrecional corresponde a una potestad legal que conforme al artículo 4 del Decreto 2010 de 1992, se le atribuyó al Director de la Policía Nacional para retirar del servicio activo al personal uniformado que conforma las filas de la Policía Nacional (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, 1992). Tal facultad tenía el fin de “depurar” la institución por la crisis disciplinaria generada por los presuntos hechos de corrupción presentados al interior de la Institución policial en el primer tercio de la década de los noventa, sobre todo ante la permeabilización del narcotráfico en las filas castrenses.

En el año 1995, época en la que implementó la facultad de retiro discrecional se dijo que:  
El objetivo de la medida es afilar el proceso de depuración interna que según el Ministro de la Defensa, Fernando Botero, se ha traducido en el despido de más de siete mil miembros

(...) sólo en los primeros tres meses de este año, fueron retirados de la institución 67 oficiales: tres coroneles, 13 tenientes coroneles, 25 mayores, diez capitanes, ocho tenientes y ocho subtenientes. Otro oficial explicó que el decreto también permitirá agilizar los expedientes que actualmente están a cargo de la Oficina de Investigaciones Internas y que involucran a más de 250 funcionarios, entre ellos 86 oficiales. (...) Los oficiales según las investigaciones internas de la Policía fueron retirados de la institución por estar vinculados en delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y otras conductas anómalas en la prestación del servicio...A raíz de la destitución de los 67 oficiales el general Serrano dijo que aspiraba a que cuando haya terminado el proceso de depuración que se está adelantando, se deje de hablar de la corrupción de la Policía, y se comience a hablar de la honestidad de la Policía. (Redacción El Tiempo, 1995)

La (Corte Constitucional, 1993) en Sentencia C-175 también se refirió a los motivos de la facultad de retiro discrecional, al declarar la exequibilidad del artículo 4 del Decreto 2010 de 1992.

Así:

Ante hechos tan graves de corrupción que en gran parte inciden en el estado de zozobra, intranquilidad e inseguridad ciudadana, el Gobierno Nacional faculta al Director General de la Policía Nacional para retirar de la Institución a aquellos agentes que "por razones del servicio", determinadas por la Inspección General de la misma entidad, no merecen continuar laborando en dicho cuerpo armado, sin necesidad de cumplir requisito distinto a escuchar el concepto previo del Comité de Evaluación de oficiales subalternos a que alude el artículo 47 del Decreto 1212 de 1990, mecanismo que para la Corte Constitucional era necesario implantar ante la ausencia de un precepto legal... por tanto era urgente e

indispensable dotar a la Policía Nacional de un medio idóneo para proceder a su saneamiento con el fin de asegurar el desempeño eficaz de la función pública que le ha sido asignada y en esta forma recobrar la credibilidad y confianza... (pp. 14-15).

La finalidad de depuración de la facultad de retiro discrecional persiste en una época más reciente y ejemplo de ello es que en el año 2016 el Director de la Policía Nacional haya anunciado la destitución de 373 policiales después de la Segunda Cumbre del Cuerpo de Generales. También se informó sobre la importancia del mejoramiento de la imagen de la Policía Nacional, pues otra decisión adoptada en la mentada cumbre fue la de “retirar de servicio activo a 1427 uniformados, entre ellos 89 oficiales.” (El Colombiano, 2016, parr. 2).

En el año 1995, se establecieron las normas de carrera de oficiales, suboficiales, agentes e integrantes del nivel ejecutivo a través del Decreto Ley 573 de 1995 del Ministerio de Defensa, con el cual se modificó parcialmente el Decreto 41 del 10 de enero de 1994 proferido por la Presidencia de La República. Igualmente se dictaron normas con las que se reguló la carrera de los oficiales y Suboficiales de la institución policial, como el Decreto 574 de 1995 que fuera dictado por el Ministerio de Defensa, a través del cual se modificó, de manera parcial el Decreto 262 de enero 31 de 1994 con el cual se reglamentó la carrera de Agentes de la Policía Nacional.

En medio de los esfuerzos para transformar a la institución, el Gobierno de Colombia llevó a cabo el denominado “Programa de Transformación Cultural”. El primer componente de este programa, fue el “*Plan de transparencia*”, consistió en una depuración a gran escala con base en las facultades especiales otorgadas al Director de la Policía Nacional en los Decretos 132, 573 y 574 de 1995 expedidos por el Presidente de la República para destituir a cualquier miembro de la institución, sin procedimiento previo ni argumentar ninguna causal. Entre 1995 y 1998, se retiraron

aproximadamente 7.000 policías a través de esta vía, método que permitía cambiar la imagen de la institución y renovarla internamente (Casas, 2005).

El Decreto N° 2010 de 1992 inicialmente estableció la discrecionalidad como un mecanismo adecuado para la optimización en la administración del recurso humano, encaminado al mejoramiento del servicio policial. Luego de haberse previsto esta facultad discrecional, en el Decreto 1790 del 2000 que aplica a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, se precisó el ejercicio de esta facultad discrecional en cabeza del Director de la Policía Nacional, norma con rango legislativo por haber sido expedida por el Ejecutivo, es decir, por el Presidente de la República.

La (Corte Constitucional, 1995) en Sentencia C-525 señaló que la discrecionalidad no es arbitrariedad aplicable para retiro del servicio de miembros de la Fuerza Pública y para la Policía Nacional. En este sentido, determinó que la razón de ser de la medida de retiro discrecional es el mejoramiento de la prestación del servicio con el propósito del cumplimiento de los fines esenciales del Estado, que no son otros que garantizar el desarrollo en condiciones dignas, la convivencia pacífica y el respeto por los derechos fundamentales.

Debe señalarse que el ordenamiento jurídico colombiano prescribe el principio de prohibición de la arbitrariedad de manera no expresa en la Constitución de 1991. Sin embargo, este principio sí deriva de las normas que allí se consagran. Al respecto la (Corte Constitucional, 1995) en Sentencia C-318 dijo:

[E]l artículo 1° define a Colombia como un Estado social de derecho fundado en la prevalencia del interés general, lo cual excluye que los funcionarios puedan ejercer sus atribuciones de manera caprichosa. Por su parte, el artículo 2° delimita los fines del Estado



y los objetivos de las autoridades públicas, lo cual muestra que las atribuciones ejercidas por las autoridades deben estar destinadas a realizar esos valores constitucionales y no a satisfacer el arbitrio del funcionario. Esto se ve complementado por el artículo 123 superior que establece expresamente que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercerán sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento. Finalmente, el artículo 209 define los principios que orientan la función administrativa y señala que ésta se encuentra al servicio de los intereses generales y debe ser ejercida de manera igualitaria e imparcial. (p. 13)

La línea jurisprudencial planteada por la (Corte Constitucional, 2013) se mantiene en recientes pronunciamientos, pues en Sentencia T-265 expuso que la facultad discrecional para el retiro de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional no puede establecerse como sinónimo de arbitrariedad, liberalidad o abuso de poder, sino que ella debe ceñirse al espíritu y los fines propios de la discrecionalidad con criterios objetivos y razonables conforme la Constitución y las razones del servicio, es decir, los criterios de retiro deben tener relación con el deficiente desempeño del agente de policía, la inobservancia de funciones, la ejecución de actos reprochables y que pueden calificarse como una prestación irregular del servicio.

De conformidad con el principio de legalidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la administración está obligada a motivar adecuadamente sus decisiones, particularmente en casos como los tres que fueron analizados en esta investigación, entendiendo que la desvinculación de un miembro de la policía implica poner fin a un proyecto de vida cuya realización puede llevar más de una década y condenando al afectado a una situación de

precariedad laboral, pues dada la especificidad de la función policial, sus posibilidades laborales son limitadas (Ramírez Leal, 2012).

## **6. Necesidades de Transformación del Servicio de Policía**

Este trabajo considera que la Policía Nacional ha adquirido una gran concentración de poder en todas las áreas del servicio a través de las cuales garantiza las libertades ciudadanas. Conforme el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia de 1991 la Institución policial tiene como propósito fundamental “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).

Este poder de policía entendido como “la potestad de dictar normas generales que restringen el ejercicio de los derechos fundamentales” (La voz del derecho, 2016) aunado a lo prescrito en artículo 16 del Código Nacional de Policía, le atribuye la función de policía a la institución consistente en “hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia.”

Pero este poder institucional fue permeándose de corrupción con la proliferación del narcotráfico, que en los años 1980 y 1990 generaba para sus integrantes una forma de obtener dinero fácil y les permitía mejorar sus condiciones de vida en todos los grados y jerarquías de la institución (Redacción El Tiempo, 1995; Corte Constitucional, 1995) En la Sentencia SU-091 la (Corte Constitucional, 2016) hizo referencia a ésta circunstancia, así:

...el retiro Discrecional en las Fuerzas Militares y el retiro por Voluntad del Gobierno Nacional o del Director General de la Policía Nacional han sido instituidas con la finalidad

de velar por el mejoramiento del servicio frente a casos de corrupción o graves situaciones que afecten el desempeño de la función institucional, en aras de garantizar la seguridad ciudadana y la misma seguridad del Estado, sin que se requiera que el uniformado haya tenido un tiempo mínimo de servicio con el cual adquiriera el derecho a una asignación de retiro (p. 83). (Subrayado nuestro)

Entonces, se hizo indispensable buscar mecanismos para el mejoramiento del servicio llamando a calificar servicios a los funcionarios policiales que estaban incurso en investigaciones penales o disciplinarias, encaminada a recuperar la credibilidad, esencia o razón de ser de la institución policial.

A mediados de los años 1990, la institución castrense inició un proceso de reestructuración y transformación bastante amplio, que implicó la inclusión de métodos novedosos de organización con un nuevo modelo de gestión integral, e inició un proceso de modernización técnica y operacional que significó una renovación de la institución que pasó a ser reconocida internacionalmente (Castaño et al., 2013).

En 1992 la Presidencia de la República expidió el Decreto 2010, producto de la declaración de un Estado de conmoción interior y que en su artículo 4 dispuso:

“Por razones del servicio determinadas por la Inspección General de la Policía, el Director General podrá disponer el retiro de Agentes de esa institución con cualquier tiempo de servicio, con el solo concepto previo del comité de Evaluación de Oficiales Subalternos”. (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia - DAPRE, 1992)

Como se expuso en la Sentencias C-525 de 1995, Sentencia T-265 de 2013 y Sentencia T-107 de 2016, si bien es cierto que la medida de retiro discrecional sirvió para depurar la institución, es decir, para retirar del servicio activo a los policiales que se encontraban con investigaciones penales por corrupción, narcotráfico, hurto, enriquecimiento ilícito, cohecho, peculado, también generó gran cantidad de arbitrariedades y violación de derechos humanos (Corte Constitucional, 1995, 2013, 2016) Con el Decreto 1213 de 1990 con el cual se reguló la carrera de Agentes de la Policía, se estableció como tiempo mínimo para poder aplicar la facultad discrecional por parte del Director de la institución, el cumplimiento de quince años al servicio de la institución, convirtiéndose hoy por hoy en un término peligroso que implica para sus miembros el temor del cumplimiento de ese período<sup>3</sup>.

Esta desmedida facultad discrecional en cabeza del Director de la Policía, ha servido como instrumento de venganzas, abuso de poder e imposición jerárquica con las cuales se ha venido desconociendo garantías y derechos de los miembros de la Institución, conllevando a la reclamación a través de la jurisdicción administrativa mediante demandas, las cuales han sido analizadas en esta investigación y además tuve participación personal como abogada consultora. Algunas de ellas se tradujeron en condenas al Estado con el consecuente pago de cuantiosas sumas de dinero y detrimento patrimonial, sin que en ninguno de esos casos se haya presentado la acción de repetición como garantía o exigencia del respeto por las normas y su ampliación, afirmación que se sustenta en múltiples decisiones judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa.

---

<sup>3</sup> Lo afirmado lo testimonio, en mi condición de exfuncionaria policial y actualmente abogada en ejercicio de la República de Colombia.

El desconocimiento o abuso de la facultad discrecional genera una vulneración de derechos humanos no solo al uniformado que ha sido retirado de la institución, sino también a su núcleo familiar, a quienes se les conculcan derechos humanos y fundamentales tales como el derecho a una vida digna por el desmejoramiento de las condiciones económicas que conlleva el retiro institucional del uniformado. No puede perderse de vista que para quienes se encuentran con incapacidad o tratamiento médico se ha establecido un procedimiento que aún se encuentra vigente y cuyo desconocimiento no es más la violación al debido proceso, derecho a la igualdad, a la dignidad, a la estabilidad laboral, protegidos no sólo por la Constitución sino por los tratados internacionales, como la Carta Internacional de Derecho humanos, Declaración Universal de los Derechos humanos, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y El Pacto Internacional de derechos civiles y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos.

En esta investigación no se ha cuestionado de manera alguna la legalidad en sí de la facultad discrecional cuando se trata del cumplimiento de su fin que no es otro que el *mejoramiento del servicio*. Lo que realmente se debate es el desconocimiento claro de derechos fundamentales que ejerce la Dirección de la Policía Nacional cuando a través de la facultad discrecional llama a calificar servicios a los miembros de la institución que se encuentran en tratamiento médico o en incapacidad. En este caso su aplicación desconoce abiertamente el debido proceso en distintas normas que aún conservan vigencia. Estas Artículo 2 literal i, artículos 14, 21, 22, 35 del Decreto Ley 094 de 1989, Artículo 55 numeral 4 del Decreto Ley 1791 de 2000, modificado por la Ley 857 de 2003 y artículo 3, 4 numeral 13 y artículo 19 numerales 3 y 4 del Decreto 1796 de 2000.

En dichas normas se regula la calificación de las afecciones, la clasificación y definición de las incapacidades y el procedimiento a seguir en casos como los que ocupan la atención de esta

investigación, para que una vez se agote el procedimiento y previa Junta Médica Laboral y Tribunal Médico, disponer el retiro del uniformado por incapacidad psicofísica o en su defecto la reubicación. Esto indica entonces que para esos casos en particular no está permitido el uso de la facultad discrecional.

No basta que el derecho positivo colombiano imponga la obligación de motivar los actos administrativos y en especial los actos discrecionales, máxime que para la Policía Nacional la motivación de los actos proferidos con base en la facultad discrecional es exactamente la misma en todos los casos, cambiando solamente los nombres, documentos de identidad y fechas de ingreso de los uniformados llamados a calificar servicios, tal como se evidenció en los casos objeto de investigación.

Al respecto la (Corte Constitucional, 2013) en sentencia T-265 reprochó:

...aún hoy, después de más de veinte años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, la interpretación dominante en la jurisprudencia contencioso administrativa en relación con los actos discrecionales que se profieren con el fin de retirar al personal de la Fuerza Pública, es que los mismos, por ser una atribución legal no deben ser motivados, toda vez que están sustentados en la presunción del mejoramiento del servicio que consagra la misma ley<sup>[56]</sup> y, por ende, en aras de proteger el principio de legalidad, corresponde al afectado demostrar la desviación de poder. (p. 31)

Se reitera que no es la motivación o la falta de ésta lo que vulnera los derechos humanos de los uniformados llamados a calificar servicios, cuando se encuentran con incapacidad o en tratamiento médico, sino precisamente el desconocimiento del debido proceso, que se ha establecido para el retiro de la institución policial que no es otro que la calificación de las lesiones

de la incapacidad para poder, a través de la Junta Médica y del Tribunal Médico, definir de manera legal, la situación laboral de los uniformados, cualquiera que sea el tiempo de antigüedad que tenga el uniformado; desconocimiento que sumado al hecho de no expresarse las razones del acto, abre una puerta a la ilegalidad y a la arbitrariedad (Santofimio, 2003).

Por tanto, la administración debe fundamentar la desvinculación en ciertas “razones de servicio” mejoramiento, optimización o perfección y darlas a conocer al afectado, para que pueda establecer con meridiana claridad si el acto estuvo correctamente motivado o si se trata de una arbitrariedad, y así poder ejercer plenamente su derecho a la defensa (Rincón y Morales, 2009).

Conforme se plantea en este trabajo, el uso arbitrario de la discrecionalidad se constituye para los policiales afectados en una barrera infranqueable, por cuanto a pesar de ser susceptibles de recursos nunca se ha revocado una decisión de llamamiento a calificar servicios por parte del Director General de la Policía Nacional que ha sido robustecida por las Altas Cortes en sus pronunciamientos contradictorios. Como ejemplo, la (Corte Constitucional, 2013) en la sentencia T-265 consideró que:

...la interpretación dominante en la jurisprudencia contencioso-administrativa en relación con los actos discrecionales que se profieren con el fin de retirar al personal de la Fuerza Pública, es que los mismos, por ser una atribución legal no deben ser motivados. (p. 31)

Las disparidades o contradicciones de los criterios de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado vulneran la seguridad jurídica y el principio de igualdad, pudiendo llevar a la aplicación de estándares distintos para casos similares. Pues mientras la Corte Constitucional en su jurisprudencia como en Sentencia C-175 de 1993, C-318 de 1995, T-265 de 2013, SU-172 de 2015, T-437 de 2016 y SU-091 de 2016 insistió en la motivación del acto administrativo, para el Consejo

de Estado en sentencias como 25000-23-25-000-2003-06792-01(0938-10) Sentencia 680012315000200101079 02 (2190-2010) Sentencia 70001-23-33-000-2014-00035-01(0147-15) y Sentencia 25000-23-25-000-1999-01742-01(6853-05), no habría lugar a motivar el acto administrativo de retiro discrecional por corresponder a una atribución legal. La unificación jurisprudencial es fundamental ya que equivale a una uniformidad jurídica que fortalece las decisiones judiciales (Celis Bernal, 2017).

El pronunciamiento garantista de la (Corte Constitucional, 2015) confronta la facultad discrecional para retirar a los miembros de la Policía contra el debido proceso, precisando que la motivación del acto:

...no se agota con presentar el concepto previo de la junta asesora, sino que ésta debe documentar la realización de un examen de fondo, completo y preciso de los cargos que se le endilgan al Agente, cuyo retiro se pretende. (p. 25)

En el pronunciamiento realizado por dicha Corporación, reiteró lo enunciado en Sentencia T-432 de 2008, indicando además, que la recomendación de la Junta Asesora debía fundarse en un análisis objetivo y razonado, incluso, que los informes en los que se funda su concepto deben ser puestos en conocimiento del agente para que pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por otro lado, se añadió que no sólo la motivación del acto se configura como un límite a la facultad discrecional, sino que debe atender el cumplimiento de los fines que no son otros que el mejoramiento del servicio policial (Corte Constitucional, 2015).

La motivación o análisis objetivo y razonado para retirar del servicio a quien se encuentra con incapacidad o tratamiento médico debe fundarse en pruebas tales como historias clínicas, seguimientos y evolución clínica, en el concepto de la Junta Médica y el Tribunal Médico Laboral.



Todo el procedimiento deberá estar conforme a lo establecido en el Decreto 094 de 1989 Estatuto de la capacidad psicofísica del personal militar y la fuerza pública. En el Decreto 1791 del 2000 modificado por la Ley 857 de 2003 que modifica las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. En particular por el artículo 106 del Decreto 1790 de 2000 que dispone la regulación para la evaluación integral sobre los policiales con incapacidad o en tratamiento médico.

El fundamento del acto de retiro discrecional no puede estar solamente en el estudio de una hoja de vida que muestra un buen desempeño y galardones otorgados al agente, pues evidentemente carecería de fundamento o desdibujarían la aplicación del debido proceso que impone la valoración y calificación de las enfermedades por intermedio de la Junta Médica o Tribunal Médico para establecer la capacidad laboral del uniformado, único procedimiento que puede aplicarse en estos casos en particular. Estos señalamientos demuestran que los operadores de la jurisdicción contenciosa, también deben realizar una minuciosa observancia del acto de retiro discrecional, especialmente, revisar que el acto esté plenamente sustentado y cumpliendo las exigencias de razonabilidad y sin dejar de lado la proporcionalidad con los fines de mejoramiento del servicio.

Como se observa, no puede desconocerse la legalidad, la existencia o la aplicación de la discrecionalidad en la Policía Nacional, pues ella está reconocida, discutida y aceptada por Jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, como se puede apreciar en las sentencias de la Corte Constitucional SU-556-2014, SU-054-2015, SU 091-2016, SU-354-2017, entre otras. Lo que se investiga aquí es precisamente lo relacionado con la vulneración de derechos

humanos cuando el retiro discrecional se aplica a miembros de la institución que se encuentran en tratamiento médico o con incapacidad.

Frente a este tema, existe un vacío en la doctrina científica actual, en primer lugar, porque conforme al principio de prohibición de la arbitrariedad, que establece que se presume de pleno derecho que no debe aplicarse el acto de retiro discrecional en estos casos. En segundo lugar, por cuanto los Tribunales al fallar las múltiples demandas que por esas irregularidades se presentan, fundamentan sus decisiones SU-556-2014, SU-054-2015, SU 091-2016, SU-354-2017) únicamente en la legalidad o no del acto administrativo y en la facultad discrecional de manera general, desconociéndose los preceptos constitucionales y de Derechos Humanos, incluidos los derechos a la estabilidad laboral, al trabajo, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, al proyecto de vida y el derecho al ejercicio de una profesión.

## **7. El Debido Proceso Como Derecho Humano**

El debido proceso debe entenderse como un principio de stirpe procesal y constitucional, a través del cual, cualquier persona tiene derecho al reconocimiento efectivo de las garantías mínimas encaminadas al desarrollo de un proceso en el que tenga oportunidad de buscar un resultado equitativo, justo y con observancia de las ritualidades propias de cada asunto, a ser escuchado y controvertir las pruebas ante un Juez natural.

En sentido estricto, se denomina debido proceso a una serie de garantías que protegen a los ciudadanos inmersos en un proceso de cualquier tipo, y le aseguran la rectitud de la administración de justicia a lo largo del mismo y la salvaguarda de derechos y principios como la libertad, la seguridad jurídica, la defensa y la legalidad. Es el principio fundamental del cual derivan los demás principios procesales (Bernal y Hernández, 2001).

El debido proceso se encuentra consagrado, entre otras disposiciones jurídicas internacionales, en los artículos 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 así:

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948)

En Colombia, el debido proceso no fue consagrado constitucionalmente hasta la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, sin que ello implique la inexistencia de normas procedimentales antes de la Norma Constitucional. El Código Contencioso Administrativo de 1984, por ejemplo, establecía normas sobre el debido proceso en la materia. Sin embargo, no había sido reconocido el debido proceso como derecho fundamental (Chaves-Villada, 2015).

Para otros autores, sin embargo, la época previa a la Constitución vigente se caracterizó por la ausencia de garantías al debido proceso. Camargo (2002) por ejemplo, afirma que bajo la vigencia de la Constitución de 1886, no hubo debido proceso y la justicia fue simplemente un “aparato represivo” al servicio de las élites que gobernaban el país.

La Constitución política de Colombia consagra ese derecho en los siguientes términos:

Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991)

El debido proceso es una garantía suprema establecida como herramienta para quien se ve compelido a acudir ante cualquier autoridad judicial, administrativa o de cualquier índole y pueda a través de ella exigir la aplicación del debido proceso con todo lo que la norma representa, desde la existencia del Juez natural, la aplicación de normas y procedimientos preexistentes, así como el derecho a ser oído, a controvertir, a presentar pruebas que le garanticen un juicio o investigación justa con la imposición de una sanción acorde no sólo a los hechos investigados sino a las pruebas legalmente recaudadas.

La constitucionalización del debido proceso como un derecho humano internacionalmente reconocido, no sólo le brinda una protección adicional, sino que lo establece como un medio idóneo para la salvaguarda de los demás derechos constitucionales (Sarango, 2008).

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe una serie de requisitos y garantías necesarias para el cumplimiento del derecho al debido proceso en sede administrativa, a saber: Celebración de audiencia al interesado previa a la toma de la decisión, permitiéndole aportar alegatos y pruebas, y contar con asistencia jurídica; Notificación previa sobre la existencia del procedimiento; Fundamentación de la decisión; Cumplimiento de plazos razonables y Existencia de recursos. (Rojas Franco, 2011, p. 185).

### **7.1. El Debido Proceso y los Derechos Humanos de los Miembros de la Policía.**

La Constitución Política de 1991, en su artículo 53, inserta en el ordenamiento jurídico la prohibición de que se dicten leyes o celebren convenios, contratos o acuerdos que vayan en detrimento de la dignidad humana o de derechos que le corresponden a los trabajadores, protegiendo la estabilidad laboral reconocida en tratados internacionales como El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bajo esta normatividad debe analizarse la aplicación de la facultad discrecional con miras a establecer las garantías fundamentales que comportan el derecho al trabajo respecto a la dignidad humana como pilar fundamental de los fines del Estado.

Si se acepta que el trabajo es un derecho fundamental, se debe entender entonces que cualquier decisión o actuación que ponga en peligro su desarrollo en condiciones justas y dignas debe ser verificada, llegando incluso a eliminarlos o retirarlos del ordenamiento jurídico, máxime si se aplica en una institución como la Policía Nacional en donde el servicio se constituye en un proyecto y estilo de vida. Es justificable la protección del derecho al trabajo de los miembros de la policía, pues como lo indicara (Olivares, 2010) “La estabilidad laboral en una profesión como

la de la policía, donde ésta se convierte a su vez en estilo y proyecto de vida, es esencial y la inestabilidad laboral puede ser un factor en la aparición de la corrupción”. (p 15)

La discrecionalidad administrativa implica por su propia definición el libre arbitrio de la autoridad competente, dicho arbitrio se encuentra limitado y no puede responder a los caprichos del órgano que decide, debiendo ceñirse a los intereses públicos consagrados en la ley, así como a la lógica, la racionalidad y la justicia (Sarria, 1982).

La facultad discrecional otorgada al Director General de la Policía, que conforme al artículo 4 del Decreto 2010 de 1992 fue concebida como herramienta encaminada al mejoramiento del servicio de Policía y acorde al Decreto 1800 del 2000, para su ejercicio debía contarse con el aval de un Comité Evaluador, su concepto y la resolución de retiro motivada (Presidencia de la República, 2000). No obstante, posteriormente estas exigencias fueron desapareciendo, quedando como requisito único el haber cumplido quince (15) años de servicio, según lo establecido en Sentencia SU091/16 (Corte Constitucional, 2019) Práctica que se ha venido presentando en el período investigado (2010-2018).

Con base en esas modificaciones, el Director de la Policía ha realizado cientos de retiros institucionales, sin tener en cuenta ninguna otra situación distinta a tener cumplidos quince (15) años de servicio, es decir, desconociendo las circunstancias personales de algunos de sus miembros en especial en lo que atañe a su salud, sin tener cuenta que se encuentran en tratamientos médicos o con incapacidades (El Colombiano, 2016).

Ahora bien, para poder determinar si el llamamiento a calificar servicios con base en la facultad discrecional vulnera o no derechos humanos, es preciso tener cuenta el conjunto normativo que las regula y que le impone al Director de la Policía, su aplicación para decidir si

retira del servicio activo a estos uniformados, es decir, cuando la facultad discrecional se aplica a quienes se encuentran con incapacidades o tratamientos médicos.

La dicotomía que existe entre las normas procesales que reglamenta el procedimiento a seguir en esos casos especiales de retiro de la institución y la aplicación de la facultad discrecional es lo que lleva a realizar esta investigación, dirigida a beneficiar o ser aplicada a todos y cada uno de los integrantes de la Policía en todo el territorio Nacional, ya que desde la óptica de los derechos humanos, se estaría afianzando lo que Ávila Hernández llamó: “la lógica discursiva de los Estados nacionales, en la búsqueda de consenso y legitimidad democrática en el foro internacional” (2005, p. 79), es decir, la conciencia creada en los Estados que se adhirieron a las diferentes cartas, declaraciones y convenciones de derechos, que pasó de una aplicación material efectiva a un mero discurso que legitima a un Estado frente a la comunidad internacional y a su vez, oculta el conflicto interno del desacato de las normas procesales.

## **8. Régimen Legal de las Incapacidades y Tratamientos Médicos para la Policía Nacional**

En desarrollo de estas normas, el Presidente de la República de Colombia profirió los Decretos 094 de 1989, 1791 de 2000 y 1796 de 2000, con los cuales se establecen las causales de retiro y el procedimiento a seguir cuando un miembro de la Institución se encuentra en tratamiento médico y/o con incapacidad médica, imponiendo a la institución efectuar una evaluación o junta médica preliminar en la que se calificará la capacidad laboral del uniformado y si el tratamiento o la incapacidad persiste, se hará una nueva junta médica que será definitiva, brindando además al uniformado incapacitado la oportunidad de ser reubicado en labores administrativas.

En el Decreto 094 de 1989, conforme el artículo 1 se reguló “la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional...”. Esta norma exige cumplir ciertas formalidades tales como lo prescrito en el Artículo 8:

Exámenes Para Retiro. Los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad psicofísica para retiro así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, deben observar completa continuidad, desde su comienzo hasta su terminación. La existencia de un Comité de evaluación, el acta de solicitud de retiro y la correspondiente aprobación para una adecuada aplicación, estableciéndose además unas normas procesales de igual importancia, que ante el total desconocimiento son de las cuales se reclama su violación. (Presidencia de la República, 1989)

También prescribe la valoración de una junta médico-laboral que conforme el artículo 21 “Su finalidad es la de llevar a un diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y secuelas, valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio y fijar los correspondientes índices para fines de indemnizaciones cuando a ello hubiere lugar.” (Presidencia de la República, 1989)

El Decreto 1791 de 2000 prescribe en el artículo 55 numeral 3, la causal de retiro “por disminución de la capacidad psicofísica” y en su numeral 4 “Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez” (Presidencia de la República, 2000) No obstante la (Corte Constitucional, 2005) en su Sentencia C-381 de 2005 declaró condicionalmente exequible esta disposición, en el entendido que sólo procedía el retiro del servicio cuando el concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable. De allí que la misma jurisprudencia constitucional haya modificado el artículo 59, condicionando el retiro por disminución de la capacidad psicofísica así:



[S]e podrá mantener en servicio activo a aquellos policiales que habiendo sufrido disminución de la capacidad sicofísica y obtenido concepto favorable de la Junta Médico Laboral sobre reubicación, y sus capacidades puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción. (Presidencia de la República, 2000)

Finalmente, el Decreto 1976 de 2000, artículo 19, numeral 3, precisó como causal de convocatoria de junta médico-laboral: “Cuando la incapacidad sea igual o superior a tres (3) meses, continuos o discontinuos, en un (1) año contado a partir de la fecha de expedición de la primera excusa de servicio total.” (Presidencia de la República, 2000). Y el párrafo de la misma disposición señala:

Si después de una Junta Médico-Laboral definitiva la persona continúa al servicio de la Institución y presenta más adelante lesiones o afecciones diferentes, éstas serán precisadas y evaluadas mediante nueva Junta Médico-Laboral. (Presidencia de la República, 2000)

Entonces, frente a estos casos en particular no se le ha extendido a la Policía Nacional en cabeza del Director de la institución, la facultad discrecional para retirar del servicio activo a quien se encuentra en tratamiento médico inconcluso y/o incapacitado. De ser esto así, se vulneraría flagrantemente el derecho al debido proceso previamente establecido en los decretos referidos, lo que a su vez constituiría una vulneración de los derechos fundamentales de los miembros de la Policía Nacional, conculcándose las obligaciones que le asisten no solo a la Institución sino al Estado como el proteger, reparar y garantizar el efectivo reconocimiento y goce de los derechos humanos.

No puede pasarse por alto que con la vulneración al derecho del debido proceso, se afectarían al mismo tiempo, otros derechos de la misma índole, como el derecho al trabajo, al libre

desarrollo de la personalidad, a la estabilidad laboral, a elegir libremente la profesión u oficio y hasta el derecho a la integridad psíquica o moral que tienen que tener los policías, garantías que fueron establecidas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, Convención Interamericana en contra de la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia, Carta de la Organización de los Estados Unidos, Estatuto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como en otras normas, convenios y recomendaciones de la OIT.

Desconocer estos procedimientos que son de orden público y por tanto de obligatorio cumplimiento, conlleva a una vulneración de las garantías fundamentales tantas veces señaladas en el ordenamiento jurídico de Colombia. Particularmente, en su Constitución, se protegen los derechos de las personas con discapacidad, protección que tiene dos enfoques. En primer lugar, se prohíbe la discriminación de las personas discapacitadas. Y en segundo lugar, se consagra la estabilidad laboral reforzada, que se extiende a los miembros de las fuerzas armadas y a los trabajadores públicos (Correa-Montoya, 2009).

## **9. Análisis de Estudio de Caso**

En este trabajo, se analizaron tres casos sistemáticos o representativos en los que en aplicación de la discrecionalidad, los miembros de la Policía Nacional fueron llamados a calificar servicios estando en tratamiento médico o con incapacidad otorgada por médicos y especialistas autorizados o contratados por la Policía Nacional.

### **9.1. Intendente Jefe Eduardo José Mancera Barreto.**

Cuando el Intendente Jefe se disponía a capturar en flagrancia a un extorsionista, sufrió a bordo de una motocicleta de la institución un accidente laboral que fuera calificado por el

Comandante de Departamento de Policía de Cúcuta mediante informe administrativo prestacional por lesiones de radicado 043 del 11 de noviembre de 2014. En el informe administrativo se resolvió: “calificar las lesiones adquiridas por el señor Intendente Jefe EDUARDO JOSE MANCERA BARRETO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.389.023 expedida en Ibagué, determinando que se enmarca en lo establecido en el Decreto 1796 de 2000 artículo 24 literal B. “En el servicio y por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o accidente de trabajo” norma que regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, de las Fuerza Pública y la Policía Nacional. (Presidencia de la República de Colombia, 2000)

El día 13 de mayo de 2016, mediante Resolución N° 02760 el Intendente Jefe Eduardo José Mancera Barreto fue retirado del servicio, esto es, mientras se encontraba con incapacidades laborales y tratamientos médicos de diferentes especialidades. Como consecuencia de esto, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante y ante las evidencias de la discapacidad médica derivada de un accidente laboral, le fueron negadas las pretensiones de la demanda con sentencia del 22 de marzo de 2019, con el único análisis de la legalidad de la discrecionalidad del Director de la Policía Nacional, indicando que “la Resolución no. 027060 del 13 de mayo de 2016 mediante la cual se retiró del servicio activo de la Policía Nacional al señor Eduardo José mancera Barreto por llamamiento a calificar servicios, cumplió con los requisitos exigidos para su procedencia, esto es, el tiempo mínimo de prestación de servicio del accionante y el reconocimiento de una asignación mensual de retiro” (Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, 2019). Se considera entonces que, por desconocimiento legal, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al trabajo y a la dignidad humana.

## **9.2. Subintendente Ingrid Minnelly Salamanca Arguello.**

Con Resolución N° 02758 del 13 de mayo de 2016 expedida por el Director General de la Policía Nacional, la Subintendente Ingrid Minnelly Salamanca Arguello fue llamada a calificar servicios con base en la facultad discrecional del Director de la Policía. Igualmente, se encontraba en tratamiento médico autorizado por la Policía Nacional, por lo que instauró la correspondiente demanda ante la jurisdicción contencioso administrativo. No obstante el (Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Ibagué, 2018) profirió sentencia desfavorable el 12 de diciembre de 2018 con el único argumento de la legalidad de la facultad discrecional.

## **9.3. Subcomisario Danilo Gómez Meneses.**

El Subcomisario Danilo Gómez Meneses en desarrollo de la prestación del servicio sufrió una lesión en *asonada* contra la fuerza pública el día el 22 de noviembre de 2008 en el Municipio de Honda – Tolima. Como consecuencia, recibió lesiones del Manguito Rotador Izquierdo grado máximo, Disco-Patía lumbosacra L5- S1 con protrusión discal central y parasagital izquierda. Como consecuencia de dichas lesiones el Comandante del Departamento de Policía Tolima, levantó informe administrativo por lesiones No 0116/098, en el que se estableció que las lesiones del señor Danilo Gómez Meneses ocurrieron “en el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional”, de acuerdo a lo estipulado en la artículo 24 literal C del decreto 1796 del 14 de Septiembre de 2000 Estatuto de capacidad psicofísica, incapacidades, invalidez e indemnización. (Presidencia de la República de Colombia, 2000).

No obstante lo anterior, con Resolución N° 02470 del 13 de mayo de 2016 (Ministerio de Defensa - Policía Nacional, 2016) fue llamado a calificar servicios, por lo que instauró demanda administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho, obteniendo sentencia desfavorable del 31 de marzo de 2020, con fundamento nuevamente en la legalidad de la discrecionalidad otorgada al Director de la Policía Nacional. (Juzgado 11 administrativo de Ibagué, 2020)

Del análisis de los casos anteriores, la posición de este trabajo de investigación, es que no queda duda alguna de la aplicación sistemática de esta facultad, pues basta con realizar una lectura del contenido de las Resoluciones referidas para observar que se trata de un modelo con la misma justificación descrita en el numeral 2 del artículo 55 del Decreto Ley 1971 de 2000: “El retiro se produce por las siguientes causales: 2 Por llamamiento a calificar servicios”, además de lo enunciado en el artículo 57 ibídem: “El personal del Nivel ejecutivo solo podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, después de haber cumplido veinte (20) años de servicio” (Presidencia de la República, 2000) Es decir, solo cambian o modifican los nombres de quien va a ser retirado del servicio institucional.

El retiro discrecional de los miembros de la Policía Nacional constituye un punto fuerte de debate, lo que hace referencia a la forma de aplicación y las finalidades de éste como instrumento para el debido ejercicio de la función pública. Empero, el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia de 1991 consagra: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) Esta constitucionalización del derecho ha obligado a tener una visión más allá de la simple legalidad de tal facultad, en especial

cuando se trata de desvincular del servicio activo a quienes se encuentran en tratamiento o con incapacidades médicas o excusa de servicio.

#### **10. Reflexiones Sobre Pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado**

En procura de la guarda de la primacía de la Constitución de 1991, la Corte Constitucional ha realizado múltiples pronunciamientos en los que ha establecido la correspondencia entre la aplicación de la facultad discrecional y la Constitución (Sentencia C- 525 de 1995 y Sentencia C-179 de 2006, Sentencia T-432 de 2008, sentencia T-265 de 2013, Sentencia SU-091 de 2016, entre otras), en las que establece como requisito para su aplicación la observación y el cumplimiento de los fines del Estado, y el respeto por los derechos humanos de los miembros de la Policía sin que se establezca ningún otro requisito o limitante, lo que a su vez ha permitido que se presenten irregularidades, arbitrariedad, así como decisiones caprichosas o personalistas que van en detrimento de los derechos del afectado.

La facultad discrecional conferida al Director General de la Policía Nacional para el retiro de funcionarios de la Policía Nacional, solo existe dentro de un marco normativo que establece límites para su ejercicio. En este sentido, tal potestad se encuadra dentro de una norma que establece tanto la existencia misma de dicha discrecionalidad, el órgano competente para ejercerla y la finalidad específica de la misma (Del Pilar Guerrero, 2010).

En los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional, se ha establecido que cualesquiera que sean los motivos que generaron la aplicación de la facultad discrecional, éstos deben estar direccionados a obtener el fin para la cual fue creada, que no es otro que el mejoramiento del servicio. En la aplicación de la facultad discrecional deberá estudiarse con sumo cuidado la hoja de vida, la trayectoria, el desempeño general del policial, tal como sea dispuesto

en la sentencias No. SU -091 de febrero 25 de 2016. \_En ese sentido deberá indicarse dentro del acto administrativo o por lo menos en la notificación, de tal manera que le permita al servidor público controvertir la decisión ante los órganos jurisdiccionales en defensa de sus derechos, como quiera que ha estado al servicio de la institución y del Estado en defensa de los intereses de la sociedad desde temprana edad, forjando su proyecto de vida y el de su familia en el desempeño policial.

En contraposición con las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado que establece que los motivos de retiro con base en la discrecionalidad deben ser consignados en el Acta de proposición de retiro, en (Sentencia 25000-23-25-000-1999-01742-01(6853-05) del 26 de junio de 2008) la Corte Constitucional ha señalado que los motivos generadores de la discrecionalidad no requieren ser consignados en el acta de proposición del retiro del uniformado, ni en la resolución de retiro, ni en la notificación. Tales motivos pueden deducirse de los reglados en el artículo 218 de la Constitución Política de 1991, esto es, el mejoramiento del servicio. No obstante, no implica el desconocimiento del debido proceso como garantía superior, pues queda agotado con el acta levantada por la Junta de Evaluación y Clasificación en la que se propone el retiro definitivo del policial por voluntad del Director General de la Policía Nacional en aplicación a la facultad discrecional, máxime que el uniformado conserva el derecho de acudir a la jurisdicción administrativa a demostrar la ilegalidad del acto que dispuso su retiro.

Ha sido éste el antecedente jurisprudencial que se ha impuesto en el período comprendido entre el año 2010-2018 y en la actualidad incluso, práctica que vulnera derechos humanos de los servidores quienes al ejercer una actividad laboral profesional ameritan un tratamiento especial con relación a las garantías que les han sido asignadas a todos los integrantes del Estado, con

fundamento en el principio rector de la dignidad humana y el reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos en cabeza no solo del Director General de la Policía Nacional, sino también del Estado Colombiano, teniendo en cuenta que los miembros de la Policía Nacional de Colombia que son llamados a calificar servicios con base en la facultad discrecional estando con incapacidad o tratamiento médico han prestado un servicio al Estado, en el que han expuesto su vida, su integridad física y emocional y por tanto, se les debe garantizar el debido proceso y el reconocimiento de los derechos fundamentales y humanos de la dignidad humana, calificando sus lesiones y definiendo de esta manera su situación laboral y no a través de la aplicación de la discrecionalidad en cabeza del Director General de la Policía Nacional.

## **11. Metodología**

Esta investigación se ha desarrollado, en primer lugar, empleando el método cualitativo de estudio de caso, en cuya aplicación se tuvo en cuenta la dogmática jurídica para describir y evaluar el derecho positivo vigente. De allí el trabajo analizó el desarrollo legal que ha tenido la discrecionalidad otorgada al Director de la Policía Nacional de Colombia. También se analizó la reiterada jurisprudencia de Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que por vía de tutela o como resultado de demandas administrativas y sus consiguientes recursos, gradualmente fueron eliminando el deber de motivación de los actos administrativos o resoluciones de retiro, quedando como único requisito el haber cumplido quince (15) años de servicio activo para su aplicación.

En segundo lugar, el trabajo utilizó el método del análisis documental y abordó el tema desde la génesis misma de la discrecionalidad, pasando por esta figura al interior de la Policía Nacional frente a los Derechos Humanos y al debido proceso como derecho fundamental, respecto de los miembros de la institución que estando en tratamiento médico o con incapacidad laboral



(sea absoluta, relativa, permanente o transitoria) son llamados a calificar servicios con base en la facultad discrecional del Director de la Policía Nacional.

### **Conclusiones y Recomendaciones**

Para que la aplicación de la facultad discrecional otorgada al Director de la Policía Nacional pueda calificarse como acorde con las normas que la sustentan y para que ésta cumpla con el fin de su creación, es necesario en términos generales, realizar por parte del Director General de la Policía Nacional un estudio detallado de las calidades del servidor policial, la capacidad académica, física, compromiso institucional, entre otras. El propósito es establecer el respeto y la garantía de los derechos humanos y fundamentales pues de no ser así se genera una desmotivación y un temor entre las personas que hacen parte de las filas institucionales, que por el solo hecho de cumplir quince (15) años de servicio en la institución son llamadas a calificar servicios en uso de esta facultad.

La presente investigación permitió establecer las razones que dieron origen a la facultad discrecional creada para la Policía Nacional con el Decreto 2010 de 1992 y su desarrollo normativo en el cual se establecen los derechos y garantías de los ciudadanos que desarrollan una actividad laboral al servicio de la Policía. Tales derechos no pueden de ninguna manera ser desconocidos por quienes detentan el poder y la facultad de garantizarlos, quienes adoptan decisiones arbitrarias, caprichosas, subjetivas, como las verificadas en los casos analizados, por tanto por fuera del marco legal con la excusa de buscar el mejoramiento del servicio soportadas precisamente en la variada y contradictoria jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, adoptando la que más se ajuste a sus intereses particulares y violando así los derechos humanos como la dignidad humana, al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, a la estabilidad laboral de los miembros de la

institución, quienes son vistos por las Altas Cortes como simples miembros de un conglomerado dentro del marco puramente natural y no como parte de una realidad política, económica, social, personalísima como categoría esencial de la dignidad humana.

La investigación determinó que la indebida e ilegal aplicación de la facultad discrecional en los miembros de la institución policial que se encuentran en tratamientos médicos o incapacitados es vulneradora de los derechos humanos y fundamentales. Pues como quedara establecido, esa facultad creada para la Policía Nacional con el Decreto 2010 de 1992, con la cual se modificó el Decreto 1791 de 2000, no permite su aplicación en esos casos para los cuales se ha dispuesto normas especiales de procedimiento, esto es, Decreto Ley 094 de 1989, Decreto Ley 1791 de 2000, modificado por la Ley 857 de 2003 y el Decreto 1796 de 2000, que establece la calificación, clasificación y la manera como se debe evaluar al servidor policial que se encuentre en estas situaciones imponiéndole al Director de la Policía la obligación de definir, en debida forma, su situación laboral, bien sea con el retiro de la institución por incapacidad psicofísica o bien sea con la reubicación laboral del uniformado.

Frente al caso puntual de quienes se encuentran en tratamiento médico o con incapacidades concedidas por los galenos autorizados por la institución, no queda más que exigir la aplicación de las normas procesales que regulan la materia y que han establecido de manera clara y preexistente, el procedimiento a seguir para retirar o reubicar en el servicio a quienes han brindado su vida al servicio de la institución y del Estado.

De las reflexiones anteriores, el trabajo reconoce el uso incongruente de la facultad discrecional que le ha sido delegada por el Ministerio de Defensa al Director General de la Policía Nacional, pues muy a pesar de los reiterados pronunciamientos de las Altas Cortes, no existe un

control o límite eficaz que garantice el cumplimiento del fin de la discrecionalidad, que no es otra que el *mejoramiento del servicio* y tal pareciera que retirando de la institución a quienes se encuentran en tratamiento médico o incapacidad médica, bien sea relativa, absoluta, transitoria o permanente se cumple con esa función. Sin embargo, no puede la Dirección de la Policía desconocer, en aplicación de esa liberalidad, derechos humanos como el derecho a un trato con dignidad humana, al debido proceso, a la defensa, que le asiste a cada uno de los integrantes de la Institución Policial. Tampoco puede descargarse esa responsabilidad en la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la vulneración de esos derechos fundamentales, de ser así, se confirmaría aún más la vulneración de tales derechos.

Tampoco se trata de desconocer la importancia y la efectividad, entendida ésta, como la capacidad de conseguir el resultado que se busca, que esta figura jurídica ha tenido en el desarrollo funcional de la Policía Nacional, pero ello, no conlleva per se a ser utilizada en todos los casos, se reitera, por cuanto el espíritu de esa facultad no puede ser otra que la del mejoramiento del servicio. Por lo que para su aplicación deberá valorarse las hojas de vida de quienes vayan a ser afectados con esas decisiones, máxime cuando se trata de casos como los analizados en esta investigación, de miembros policiales que se encuentran en tratamientos médicos y con excusa de servicio cualquiera que sea la causa y la clase. Pues para estos casos en particular, las normas ya descritas han establecido el procedimiento a seguir para su retiro de la institución y de manera alguna, está contemplado el uso de la facultad discrecional.

Finalmente, puede decirse que la efectividad es un beneficio directo del hecho que el director de la Policía Nacional ostente la facultad discrecional de retiro. No obstante resultaría necesario determinar si esa efectividad responde a necesidades internas de la institución o a

factores externos de la institución. Así mismo sería pertinente poder determinar si esta facultad genera o no zosobra en el personal policial. Y de existir efectos negativos por la aplicación de la facultad discrecional de retiro, cuál sería el grado de desmejoramiento del servicio.

## REFERENCIAS

- Agudelo Giraldo, O., Prieto Salas, M. A., León Molina, J. E. y Reyes Alfonso, Y. (2017). *Lógica aplicada al razonamiento del derecho*. 2a ed. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Alemán-Pardo, M. (1997). Acerca de las diferencias entre discrecionalidad y arbitrariedad en la actuación de la Administración. *Revista jurídica de la Región de Murcia*(24), 109-121. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4714197>
- Ángel, G., et al. (2015) Corrupción, reforma y realidad. Incidencia de la corrupción publicada por los medios de comunicación en la estructura de la policía nacional de Colombia (1993–2012). *Tesis Doctoral*. Universidad del Rosario. Obtenido de <https://repository.urosario.edu.co/flexpaper/handle/10336/11904/Gualdronangel-JohnyFerney-2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ávila, F. M. (2005). Derechos Humanos y cultura en el Siglo XXI: las áreas declaratorias de derechos. *Cuadernos Prolam*, 77-101. Obtenido de [file:///C:/Users/sistemas%20one/Downloads/81792-Texto%20do%20artigo-113245-1-10-20140622%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/sistemas%20one/Downloads/81792-Texto%20do%20artigo-113245-1-10-20140622%20(1).pdf)
- Beltran De Felipe, M. (1995). *Discrecionalidad administrativa y constitución*. Editorial Tecnos. Madrid, España.
- Benítez, V. (2010). La resistencia a la constitucionalización del Derecho administrativo en Colombia: el Consejo de Estado y el caso de los actos discrecionales que ordenan el retiro. *Dáikon*, XIX(1), 99-120. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/revista/7885/V/19>

- Bernasconi, A. (2007). El carácter científico de la dogmática jurídica. *Revista de derecho (Valdivia)*, 20(1), 9-37. Obtenido de <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502007000100001>
- Bernal H. H. y Hernández S. M. (2001) *El debido proceso disciplinario*. Biblioteca Jurídica Dike. Medellín, Colombia.
- Botero, C., y Guzmán, D. (2017). *El Sistema de los derechos. Guía práctica del sistema internacional de protección de los derechos humanos*. Obtenido de [https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi\\_name\\_recurso\\_102.pdf](https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_102.pdf)
- Brewer-Carías, A. R. (1966) Los límites al poder discrecional de las autoridades administrativas. *Revista de la Facultad de Derecho*, UCAB, N° 2, Caracas 966, pp. 9-35.
- Camargo, P. P. (2002) *El debido proceso*. 2ª edición. Editorial Leyer, Bogotá.
- Casas, P. (2005). Reformas y contrarreformas en la policía colombiana. *Fundación seguridad y democracia*, 1-78. Obtenido de <http://pdba.georgetown.edu/Security/citizenssecurity/Colombia/evaluaciones/reformasyncontrarreformas.pdf>
- Cassagne, J. C. (2007). El sistema judicialista y la llamada judicialización de la actividad de la Administración Pública. *Revista española de derecho administrativo*(133), 5-28. Obtenido de <file:///C:/Users/sistemas%20one/Downloads/17284-Texto%20del%20art%C3%ADculo-68612-1-10-20170428.pdf>
- Castaño, J. H. H., Albarracín, G. P., y Mendoza, J. G. (2013). Innovación en un modelo de gestión gerencial: caso Policía Nacional de Colombia. *Gestión & Sociedad*, 6(1), 49-66.

- Celis Bernal, F. M. (2017). *Análisis del mecanismo de extensión de sentencias de unificación del Consejo de Estado, Ley 1437 de 2011- el precedente gran protagonista*. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia
- Chaves-Villada, J. (2015) El desarrollo del debido proceso en las actuaciones administrativas para la formación de contratos estatales. *Universitas*, núm. 130, enero-junio, 2015, pp. 91-134. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia
- Correa-Montoya, L. (2009). Panorama de la protección jurisprudencial a los derechos humanos de las personas con discapacidad en Colombia. *Universitas*, núm. 118, enero-junio, 2009, pp. 115-139. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.
- Del Pilar Guerrero, M. (2010) La facultad discrecional aplicada a la fuerza pública desde la jurisprudencia constitucional. *Revista Logos, Ciencia & Tecnología*, vol. 2, núm. 1, julio-diciembre, 2010, pp. 71-85. Policía Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia
- De los Santos M., A. (2012). *Derecho Administrativo I*. Estado de México: Tercer Milenio S.C. Obtenido de [http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico\\_administrativo/Derecho\\_administrativo\\_I.pdf](http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Derecho_administrativo_I.pdf)
- Fernandez, T. (2008). *De la arbitrariedad de la Administración*. Madrid: Thomson Civitas. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1871874>
- Fernández Ruiz, J. (2016) *Derecho Administrativo*. Colección del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Secretaria de Gobierno/Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F., México.

- Guerrero S., M. (01 de Diciembre de 2011). Alcance de la causal de retiro por "llamamiento a calificar servicios" en la fuerza pública. *Verba iuris* (26), 111-122. Obtenido de <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/view/2227>
- González, M., y De la Cruz, M. (2016). La evolución jurídica de la discrecionalidad en el ámbito constitucional, administrativo y tributario. *Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario*(75), 43-58. Obtenido de [http://www.icdt.co/publicaciones/revistas/Revista75/Articulo2/PUB\\_ICDT\\_ART\\_GONZALEZMaria%3BMirlodelaCruz\\_Laevolucionjuridicadeladiscrecionalidadenel\\_RevistaICDT75\\_Bogota\\_16.pdf](http://www.icdt.co/publicaciones/revistas/Revista75/Articulo2/PUB_ICDT_ART_GONZALEZMaria%3BMirlodelaCruz_Laevolucionjuridicadeladiscrecionalidadenel_RevistaICDT75_Bogota_16.pdf)
- Gordillo, A. (2013). *Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas* (1 ed.). Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo. Obtenido de [https://www.gordillo.com/pdf\\_tomo8/tomo8.pdf](https://www.gordillo.com/pdf_tomo8/tomo8.pdf)
- Laubadère, A. (1967) *Traité Elementaire de Droit Administratif*. T. I. 4ta. Edicion. Editorial. L.G.D.J. París, Francia.
- La voz del derecho. (28 de Enero de 2016). *La voz del derecho*. Obtenido de <https://lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrupt-5/item/3793-diccionario-juridico-poder-de-policia>
- Malagón, M. A. (2007). *Vivir en Policía. Una contralectura de los orígenes del derecho administrativo colombiano*. Bogotá: Externado.
- Monroy, L. (2018). *La condena al pago de sumas dejadas de percibir durante el retiro de los miembros de la Fuerza Pública, carácter indemnizatorio o de restablecimiento del derecho*. Bogotá: Universidad Libre de Colombia. Obtenido de



<https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15492/La%20condena%20al%20pago%20de%20sumas%20dejadas%20de%20percibir%20durante%20el%20retiro%20de%20los%20miembros%20de%20la%20Fuerza%20P%C3%BAblica.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Olivares Ferreto, E. (2010) Condiciones sociolaborales de los cuerpos policiales y seguridad pública. *Análisis político*. Fundación Friedrich Ebert. México D.F., México. Obtenido de <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08125.pdf>

Ortiz, K., Rodríguez, J., y Perdomo, E. (2011). *¿Debe el acto administrativo discrecional motivarse para que sea conforme a la constitución, en el retiro del servicio de los miembros de la policía nacional? Tesis*. Bogotá D.C.: Repositorio UniLibre. Obtenido de <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/6054>

Otero P., M. (1995) La arbitrariedad. *Anuario de Filosofía del Derecho* XII. págs. 387-400. Obtenido de <file:///C:/Users/sistemas%20one/Downloads/Dialnet-LaArbitrariedad-142314.pdf>

Ramírez Leal, L. M. (2012) *Facultad discrecional de retiro en la policía nacional claros y oscuros en su funcionamiento una perspectiva desde lo contencioso administrativo y lo constitucional colombiano. Tesis Doctoral*. Universidad Nacional de Colombia. Obtenido en: <http://bdigital.unal.edu.co/9536/1/luismarioramirezleal.2012.pdf>

Rincón, J. y Morales, E. (2009) "Facultad discrecional", planeación y eficiencia en la gestión del recurso humano militar. *Prolegómenos*. Vol. 12 Núm. 24 (2009) pp 11-22.

Rojas Franco, E. (2011). El debido procedimiento administrativo. *Derecho PUCP, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú*, (67) 177-188 (2011).

Disponible en: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucparticle/view/3147/3513>

Santofimio, J. O. (2003) *Tratado de Derecho Administrativo*. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.

Sarango, H. (2008) *El debido proceso y el principio de motivación de las resoluciones / sentencias judiciales*. Quito, p. 311. Tesis (Maestría en Derecho Procesal). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Derecho.

Sarria Olcos, C. (1986). La discrecionalidad administrativa. *Derecho administrativo en Latinoamérica II*. Editorial Rosaristas. Bogotá.

Sarria Olcos, C. (1982). *Discrecionalidad administrativa, Acto administrativo*. Ediciones UNSTA. Tucumán, Argentina.

### **Referencias Normativas**

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. París. Obtenido de <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>

Asamblea Nacional Constituyente. (20 de Julio de 1991). Consitutción Política de Colombia. Bogotá D.C. Obtenido de <http://www.secretariassenado.gov.co/index.php/constitucion-politica>

Congreso de la República de Colombia. (12 de Agosto de 1993). Ley. [*Ley 62 de 1993*]. DO: 40.987.

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia. (14 de Diciembre de 1992). Decreto Legislativo. [Decreto 2010 de 1992]. DO: 40.690.

Ministerio de Defensa - Policía Nacional. (13 de Mayo de 2016). Resolución 02470. Bogotá, Colombia.

Presidencia de la República. (11 de Enero de 1989). Decreto Ordinario. [*Decreto 094 de 1989*]. [DO. AÑO CXXV. N. 38651.].

Presidencia de la República. (14 de Septiembre de 2000). Decreto Ley. [*Decreto 1791 de 2000*]. [DO. 44.161.].

Presidencia de la República. (14 de Septiembre de 2000). Decreto Ley. [*Decreto 1796 de 2000*]. [DO: 44.161].

Presidencia de la república. (14 de Septiembre de 2000). Decreto Ley. [*Decreto 1800 de 2000*]. [DO: 44.161].

Presidencia de la República. (10 de julio de 1953). Decreto Legislativo. [*Decreto 1814 de 1953*]. [DO: 28.248].

Presidencia de la República. (30 de abril de 2007). Decreto Legislativo. [*Decreto 1428 de 2007*]. [DO: 46.615].

### **Referencias Jurisprudenciales**

Consejo de Estado, Sección Segunda. (26 de Junio de 2008). *Sentencia 25000-23-25-000-1999-01742-01(6853-05)*. [MP. Jesús María Lemos Bustamante].

Consejo de Estado, Sección Segunda. (09 de Febrero de 2012)). *Sentencia 680012315000200101079 02 (2190-2010)*. [MP. Gerardo Arenas Monsalve]. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=54588>

Consejo de Estado, Sección Segunda. (02 de Marzo de 2017). *Sentencia 70001-23-33-000-2014-00035-01(0147-15)*. [MP. Sandra Lisset Ibarra Velez]. Obtenido de

[https://apps.procuraduria.gov.co/guia/gd/docs/70001-23-33-000-2014-00035-01\(0147-15\).html](https://apps.procuraduria.gov.co/guia/gd/docs/70001-23-33-000-2014-00035-01(0147-15).html)

Consejo de Estado, Sección Segunda. (25 de Noviembre de 2010). *Sentencia 25000-23-25-000-2003-06792-01(0938-10)*. [MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila]. Obtenido de [http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/25000-23-25-000-2003-06792-01\(0938-10\).pdf](http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/25000-23-25-000-2003-06792-01(0938-10).pdf)

Corte Constitucional. (16 de Noviembre de 1995). *Sentencia C-525*. [MP. Vladimiro Naranjo Mesa].

Corte Constitucional. 12 de Abril de 2005). *Sentencia C-381*. [MP. Jaime Córdoba Triviño]. Obtenido de [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/c-381\\_2005.html#1](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/c-381_2005.html#1)

Corte Constitucional. (8 de Marzo de 2006). *Sentencia C-179*. [Alfredo Beltrán Sierra].

Corte Constitucional, *Sentencia SU172*. Expediente T-4.076.348 (Corte Constitucional 16 de Abril de 2015). Obtenido de [http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU172-15.htm#\\_ftnref53](http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU172-15.htm#_ftnref53)

Corte Constitucional, *Sentencia C-175*. Expediente RE-022 (Sala Plena 6 de Mayo de 1993). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-175-93.htm>

Corte Constitucional, *Sentencia C-318*. Expediente D-759 (Sala Plena 19 de Julio de 1995). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-318-95.htm>

Corte Constitucional, *Sentencia T-265*. Expediente T-3347202 (Sala Quinta de Revisión 08 de Mayo de 2013). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-265-13.htm>

Corte Constitucional, *Sentencia SU-237*. Referencia: T-6.530.835 y T-6.695.687 (Sala Plena 30 de Mayo de 2019). Obtenido de

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/SU237-19.htm>

Corte Constitucional, *Sentencia T-437*. Radicado T-5.487.948 (Sala Octava de Revisión 12 de Agosto de 2016). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-437-16.htm>

Corte Constitucional, *Sentencia SU-091*. Referencia T- 4.862.375, T-4.938.030, T-4.943.399 y T-4.954.392. (Sala Plena 25 de Febrero de 2016). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/SU091-16.htm>

Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Ibagué. (12 de Diciembre de 2018). *Sentencia de Primera Instancia*. Rad. 73001-33-33-004-2016-00418-00. Obtenido de <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2360704/20048903/N+R+418-2016.pdf/e9ca8eb1-5660-4a9d-87b8-15504d3d5218>

Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué. (22 de Marzo de 2019). *Sentencia 003*. [J.S. Luis Manuel Guzmán]. Obtenido de <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7672084/23823713/010-2016-290.pdf/f626bf76-9da7-4fcb-8c71-91d45d26bd53>

Juzgado Once administrativo de Ibagué. (31 de Marzo de 2020). *Expediente 73001-33-40-011-2016-00315-00*. [J.S. Jhon Libardo Andrade Florez. Obtenido de <https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion#DetalleProceso>

## Referencias de Prensa

El Colombiano. (11 de Mayo de 2016). En 80 días Policía retiró a más de 1.400 uniformados de la institución. *El Colombiano.com*, pág. 1. Obtenido de <https://www.elcolombiano.com/colombia/policia-retira-a-mas-de-mil-uniformados-en-plan-de-depuracion-institucional-FF4124070>

Policía Nacional de Colombia. (08 de Noviembre de 2018). *Policía Nacional de Colombia*. Obtenido de <https://www.policia.gov.co/noticia/127-anos-historia-celebra-policia-nacional-colombia>

Redacción El Tiempo. (17 de Abril de 1995). Superpoderes para depuración en la policía. *El Tiempo*. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-313863>